

SINDICALES

La reforma laboral divide a las entidades empresariales y rompió la alianza entre la CGT y la UIA

Los aportes compulsivos en los convenios unifica a sindicalistas y tres cámaras que tenían un sistema millonario de recaudación.

Ahora, CAMIMA y AFAC criticaron a sus colegas, mientras la central obrera le apunta a Martín Rappallini

La CGT retomó las negociaciones secretas con el Gobierno para modificar la reforma laboral que tratará el Senado, mientras celebra la grieta que el proyecto oficial abrió entre las entidades empresariales y que podría contribuir a su estrategia. Los líderes cegetistas, más allá de las tratativas con el sector político de la Casa Rosada (Santiago Caputo y los Menem), siguen confiando en influir en la postura de algunos gobernadores contra la iniciativa y ya explicitan cuál es su primer objetivo en esta batalla: lograr que el proyecto no se pueda tratar en las sesiones extraordinarias y deba pasar a debatirse en las ordinarias, como una forma de ganar tiempo y apostar a que desde marzo Javier Milei afronte varios frentes críticos por la economía y así se debiliten sus apoyos parlamentarios. Fue la propia CGT la que dejó trascender

cuidá
la energía

sumate al
consumo
eficiente

edenor

que las entidades empresariales estaban divididas ante la reforma laboral. La UIA es el principal apoyo del sector empleador, pero se rebelaron dos cámaras de la actividad mercantil (la Cámara Argentina de Comercio -CAC- y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME-), más la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que, casi en sintonía con la CGT, plantearon sus objeciones porque el proyecto oficial limita los aportes compulsivos para las entidades empresariales vía convenio colectivo, que ya había sido eliminado en marzo pasado a través del decreto 149. Se trata de una caja multimillonaria, de unos \$68.000 millones por año, que eran cobrados y administrados mediante el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), que existe desde 2008 y se financia, según su web, con “una contribución patronal mensual de carácter obligatorio a cargo del empleador y concierne a todos los empleados que se encuentren bajo la órbita del convenio mercantil”. Los fondos recaudados se canalizaban a través de la CAC, la CAME y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca). Y la reforma laboral le daría fuerza de ley a la prohibición de esos aportes, que entraban en una zona opaca de controles ya que el Sindicato de Comercio era más un socio que un veedor del destino de esas contribuciones. ADIMRA también se beneficiaba del aporte obligatorio y eso le valió fuertes peleas con muchas empresas metalúrgicas que se resistían a pagarlo. Algunas presentaron reclamos judiciales e incluso existen fallos favorables a esa postura. Ahora, la CAC, la CAME y ADMIRA volvieron a la carga al

**Vacunate
contra la gripe**



insistir al Gobierno y a Patricia Bullrich en el Senado que sacar ese aporte daría lugar a una judicialización de la reforma laboral porque se trata de una cláusula pactada en los convenios colectivos. Es casi el mismo argumento que utilizan los sindicalistas para defender la cuota solidaria, que sostiene el financiamiento de los gremios con esos aportes compulsivos a los trabajadores vía convenio colectivo. Pero en las últimas horas se cristalizó la ruptura del frente empresarial: la Cámara de la Pyme Metalúrgica de la República Argentina (CAMIMA) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) se unieron para expresar su respaldo a la reforma laboral del Gobierno y castigaron a las tres entidades que se oponen al proyecto: destacaron que la iniciativa “defiende el derecho a la libertad de elección de las empresas con respecto a qué entidades adherirse, sin la existencia de aportes compulsivos que sólo buscan proteger privilegios monetarios que contaminan la institucionalidad de la representatividad empresarial”. Detrás de CAMIMA y AFAC está Martín Rappallini, titular de la UIA, que alienta esa postura y se ganó la flamante enemistad de Gerardo Martínez, el ideólogo de la CGT, que se siente defraudado porque el dirigente industrial estaba en sintonía con él dentro del Consejo de Mayo y tenían una estrategia en común, pero cuando avanzó la versión dura de la reforma laboral, según el líder de la UOCRA, Rappallini “se dio vuelta y dejó sola” a la CGT, que rechazó el proyecto. El dilema en estas horas para los libertarios es que si finalmente deciden dejar a salvo las cuotas solidarias para los sindicatos, como se analiza, podrían hacer lo mismo con esos aportes que defienden la CAC, la CAME y ADIMRA.

